


ACUERDO: IEEBC/CTyAI/017/2020-1

Con fundamento en el artículo Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de las versiones públicas, y el artículo 12, fracción II, del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Estatal Electoral de Baja California, el Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Estatal Electoral de Baja California, emitió el siguiente:

ACUERDO IEEBC/CTyAI/017/2020-1: SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS, ASÍ COMO DE LA RESOLUCIÓN APROBADA POR EL CONSEJO GENERAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ELECTORAL, CONSECUENTEMENTE SE APRUEBAN LA VERSIONES PÚBLICAS DE LAS MISMAS, CLASIFICANDO COMO CONFIDENCIAL LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

- Cuenta de correo electrónico personal

El cual fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Lo anterior dado en la Séptima Sesión Ordinaria celebrada el diecisiete de julio de dos mil veinte.



COMITÉ DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DEL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

C. JAVIER BIELMA SÁNCHEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

**RESOLUCIÓN
NÚMERO SEIS**

**H. CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA**

Presente.-

Quienes integramos la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General Electoral, con fundamento en los artículos 5, Apartado B, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 33, 35, 36, fracción III, inciso a), 45, fracción VI, 46, fracción XXIV, 354, 359, fracción II, 364, 367 y 370 de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 23 y 34, numeral 1, inciso a), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, respetuosamente sometemos a su consideración la **RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO BAJO LA CLAVE DE EXPEDIENTE IEEBC/UTCE/PSO/05/2020**, bajo los siguientes antecedentes, considerandos y puntos resolutivos.

GLOSARIO

Comisión de Quejas

La Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General.

Consejo General

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

INE

El Instituto Nacional Electoral.

Instituto

El Instituto Estatal Electoral de Baja California.

Ley Electoral

La Ley Electoral del Estado de Baja California.

Reglamento del Instituto

El Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

Reglamento de Quejas

El Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de Baja California.

Unidad de lo Contencioso

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto.



ANTECEDENTES

1. SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO

1.1 VISTA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. El trece de enero de dos mil veinte, mediante oficio número IEEBC/SE/079/2020, la Secretaría Ejecutiva del Instituto turnó a la Unidad de lo Contencioso, el diverso INE/BC/JLE/VS/0038/2020, signado por la Lic. María Luisa Flores Huerta, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE en Baja California, por medio del cual trasladó para conocimiento, el escrito de denuncia signado por la C. Socorro Irma Andazola Gómez, en su carácter de Diputada Federal del Grupo Parlamentario de MORENA en contra de la C. Carlota Lara Guzmán, Diputada Federal Suplente, por la presunta *"contravención a las normas sobre contenido de propaganda político electoral, cuando contenga nombres, imágenes, o símbolos, como el logotipo oficial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que promuevan un servidor público, así como por actos de precampaña o campaña que puedan considerarse anticipados"*.

La citada denuncia fue interpuesta el diez de enero de dos mil veinte por la C. Socorro Irma Andazola Gómez, ante la Oficialía de Partes del INE.

No obstante, la Junta Local Ejecutiva del INE da vista a este Instituto, por considerar que la conducta denunciada se circunscribe al ámbito local, a efecto de que se determine lo que en derecho proceda.

1.2 HECHOS DENUNCIADOS. Del análisis integral del escrito de queja, se advierte que los hechos denunciados por parte de la C. Socorro Irma Andazola Gómez, son los siguientes:

"...

1. Que durante el proceso electoral 2017-2018 competí, por la Coalición Juntos Haremos Historia, para el cargo de Diputada Federal de Mayoría Relativa, en el Distrito 04 Federal del Estado de Baja California, con cabecera en Tijuana, donde resulté electa para el periodo que comprende del 31 de agosto de 2018 al 31 de agosto de 2021.

2. Que desde el 31 de agosto de 2018 TOMÉ FORMAL PROTESTA DE MI ENCARGO, Como Diputada Federal del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en donde me desempeño como Secretaria de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte; integrantes de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal; e, Integrante de la Comisión de Vivienda.
3. Que durante el Proceso Electoral 2017-2018, fue registrada como mi compañera de fórmula la C. Carlota Lara Guzmán, como diputada suplente para el Distrito 04 Federal del Estado de Baja California, con cabecera en Tijuana.
4. Que la C. Carlota Lara Guzmán, NUNCA HA TOMADO PROTESTA como diputada en funciones, por lo que de manera formal no ejerce el cargo de Diputada Federal.
5. Es el caso que la C. Carlota Lara Guzmán, desde el 1ro de septiembre de 2018, ha venido ostentándose como Diputada Federal en funciones, por lo que ha instalado, de manera pública y abierta, un módulo de "Atención Ciudadana", en el inmueble ubicado en Plaza Tigre en el Boulevard Mariano Matamoros número 7773 (siete mil setecientos setenta y tres), local 206, colonia Mariano Matamoros municipio de Tijuana, Baja California, en donde ha colocado una lona y un letrero luminoso como anuncio publicitario, en la que puede leerse Carlota Lara Guzmán, Diputada Federal Suplente, y en los extremos de esta manta está impreso, del lado izquierdo, el logotipo oficial de la Cámara de Diputados, y, por el lado derecho, el emblema oficial del Morena."

1.3 RADICACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN E INVESTIGACION PRELIMINAR. El veintiuno de enero de dos mil veinte, la Unidad de lo Contencioso acordó radicar el procedimiento en cita, mismo que se registró con la clave de expediente IEEBC/UTCE/PSO/05/2020, reservándose la admisión del asunto, el emplazamiento a las partes, así como el pronunciamiento respecto de la solicitud de medidas cautelares hasta en tanto se realizaran las diligencias preliminares de investigación, a fin de integrar correctamente el expediente al rubro indicado.

En atención a lo anterior, se ordenó la inspección ocular en Boulevard Mariano Matamoros número 7773, local 206, Colonia Mariano Matamoros, Municipio de Tijuana, Baja California (Plaza Tigre).



Asimismo, se ordenó emitir diversos requerimientos, con la finalidad de obtener información necesaria para el dictado de la medida cautelar, conforme a lo siguiente:

NO.	SUJETO A NOTIFICAR	MEDIO DE NOTIFICACIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN	RESPUESTA
1	Socorro Irma Andazola Gómez	CORREO ELECTRONICO: [REDACTED] OFICIO NÚMERO: IEIBC/UTCE/024/2020 <ul style="list-style-type: none"> Requiriendo señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el municipio de Mexicali en el Estado de Baja California. 	21-01-2020 (correo electrónico) 22-01-2020 (recibió personalmente)	22-01-2020
2	Carlota Lara Guzmán	OFICIO NÚMERO: IEIBC/UTCE/028/2020 <ol style="list-style-type: none"> Si actualmente ejerce funciones como Diputada Suplente de la LXIV Legislatura Federal. En su caso informe la fecha en que tomó protesta como Diputada Suplente de la LXIV Legislatura Federal, que la faculta para ostentarse como tal. Si usted ha instalado un módulo de atención ciudadana ostentándose como Diputada Suplente de la LXIV Legislatura Federal perteneciente al Grupo Parlamentario de MORENA. En su caso especifique el domicilio y que tipo de actividades, gestiones o servicios ofrece en el módulo de atención ciudadana. Si las actividades que ofrece en el módulo son gratuitas o requieren de ser pagadas. En su caso, el horario de atención del módulo ciudadano. Si el costo de instalación y mantenimiento del módulo fue y está siendo cubierto por recursos que le son propios. Si ha informado sobre la instalación del módulo de referencia, al Partido Político MORENA, a la Coordinación del Grupo Parlamentario de MORENA perteneciente a la LXIV Legislatura Federal o a la Presidencia de la LXIV Legislatura Federal." Si ha tenido la anuencia de alguno de los señalados con antelación para la instalación del módulo y prestación del servicio que brinda. 	22-01-2020	24-01-2020

* SE ELIMINA LA INFORMACIÓN ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL, POR REFERIR DATOS PERSONALES.

1.4 ADMISIÓN DE LA DENUNCIA, RESERVA DE EMPLAZAMIENTO Y PROPUESTA DE MEDIDAS CAUTELARES. El veinticuatro de enero de dos mil veinte, se admitió a trámite la denuncia, se reservó el emplazamiento a las partes hasta en tanto culminará la etapa de investigación y se acordó elaborar el proyecto de acuerdo respecto de la solicitud de medidas cautelares.

1.5 IMPROCEDENCIA DE SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES. El veintiocho de enero de dos mil veinte, la Comisión de Quejas resolvió declarar improcedente la adopción de medidas cautelares solicitadas por la C. Socorro Irma Andazola Gómez.

1.6 ELABORACIÓN DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN. El seis de marzo de dos mil veinte, la Unidad de lo Contencioso ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente y turnarlo a la Comisión de Quejas y Denuncias para su discusión, modificación y aprobación en su caso, de conformidad con los artículos 368, fracción I, párrafo segundo y 370, fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja California.

1.7 REMISIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN. El nueve de junio de dos mil veinte, la Unidad de lo Contencioso, a través del oficio IEEBC/UTCE/172/2020, remitió a la Comisión de Quejas, el proyecto de resolución para su conocimiento y estudio.

1.8 SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS. El once de junio de dos mil veinte, la Comisión de Quejas de este Instituto, celebró sesión de dictaminación con el objeto de analizar el proyecto de resolución número seis relativa al procedimiento sancionador ordinario IEEBC/UTCE/PSO/05/2020, sesión a la que asistieron por la Comisión, la C. Olga Viridiana Maciel Sánchez, Presidente, los CC. Daniel García García y Lorenza Gabriela Soberanes Eguía como Vocales, así como la C. Judith Valenzuela Pérez, Secretaria Técnica; asimismo participaron por parte del Consejo General los CC. Graciela Amezola Canseco y Jorge Alberto Aranda Miranda, así como el C. Raúl Guzmán Gómez, en su calidad de Secretario Ejecutivo, de igual forma asistieron los CC. Alejandro Jaen Beltrán Gómez, Rosendo López Guzmán, María Elena Camacho Soberanes, Salvador Guzmán Murillo, Salvador Miguel de Loera Guardado, Hipólito Manuel



Sánchez Zavala y José Luis Ángel Oliva Rojo, Representantes de los Partidos Políticos, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, de Baja California, de Movimiento Ciudadano, de MORENA y de Encuentro Social de Baja California, respectivamente.

Cabe señalar que los comentarios vertidos durante la sesión se encuentran en el acta que para tal efecto se levantó. Por lo cual, una vez que fue suficientemente discutido el proyecto de punto de acuerdo se sometió a votación de los integrantes de la Comisión quienes determinaron aprobarlo por unanimidad de votos.

En virtud de los antecedentes relatados; y

CONSIDERANDOS

I. COMPETENCIA. El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar que los principios rectores de la función pública electoral guíen todas las actividades del Instituto. Entre sus atribuciones están las contenidas en las fracciones II y XXIV del artículo 46 de la Ley Electoral, que consisten en conocer de las infracciones y faltas, en el ámbito de su competencia, y en su caso, acordar imponer las sanciones que correspondan, en los términos establecidos en la Ley.

El Consejo General funciona en pleno o comisiones; entre las comisiones permanentes se encuentra la Comisión de Quejas, la que de conformidad con lo establecido por los artículos 359, fracción II, 368, fracción I, párrafo segundo, 370, fracción I, de la Ley Electoral, y 34, numeral 1, inciso a), del Reglamento del Instituto, tiene como atribución conocer y dictaminar sobre el proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario.

Es por lo anterior que, en el caso, se surte la competencia del Consejo General para realizar el estudio y votación de este proyecto.



II. CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Los artículos 364 y 365 de la Ley Electoral, establecen que el procedimiento sancionador ordinario tiene por objeto sancionar las infracciones cometidas a las disposiciones electorales, dentro y fuera del proceso electoral local y que podrá iniciar a instancia de parte, o de oficio cuando cualquier órgano del Instituto Estatal tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras.

El artículo 367 de la Ley Electoral señala lo siguiente:

"Artículo 367.- Son causas de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia, además de los supuestos contenidos en el presente capítulo, las siguientes:

I. De improcedencia, cuando:

a) [...]

b) [...]

c) Se denuncien actos de los que la autoridad electoral resulte incompetente para conocer; o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones a la presente Ley..."

II. De sobreseimiento, cuando:

a) Habiendo sido admitida la queja o denuncia, sobrevenga alguna de las causales de improcedencia;

b) [...]

c) [...]

El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento se realizará de oficio."

Por lo que, al tratarse de una cuestión de orden público, no obstante que la denuncia haya sido admitida; en todo momento y hasta antes del cierre de instrucción, es posible verificar si en la especie se actualiza alguna causal de improcedencia o sobreseimiento de las previstas en la normatividad de la materia, pues de ser así, existirá un obstáculo que impida la válida continuación del proceso, imposibilitando un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

De igual manera, el artículo 44 del Reglamento de Quejas y Denuncias, establece lo siguiente:



"Artículo 44. Improcedencia y sobreseimiento en el procedimiento sancionador ordinario.

1. La queja o denuncia será improcedente cuando:

I. [...]

II. [...]

III. Se denuncien actos de los que la autoridad electoral resulte incompetente para conocer; o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones a la Ley Electoral;"

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

I. Habiendo sido admitida la queja o denuncia, sobrevenga alguna causal de improcedencia;

II. [...]

III. [...]

3. El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento se realizará de oficio."

De lo anterior y una vez que se realizó el análisis de lo denunciado con la finalidad de verificar si existen elementos suficientes para la válida continuación del procedimiento administrativo sancionador o si se actualiza alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento contempladas en la normatividad electoral, se advierte que existe el obstáculo previsto en los artículos 367, fracción II, inciso a) en relación con la fracción I inciso c) de la Ley Electoral; y 44, numeral 2, fracción I del Reglamento de Quejas y Denuncias, en base a los siguientes razonamientos:

En principio, es de señalar que la causal que se estima actualiza la improcedencia versa sobre actos de los que la autoridad electoral resulte incompetente y siendo que la competencia es un presupuesto de validez de los actos de autoridad, ésta solo debe actuar cuando la Constitución o la ley se lo permiten, en la forma y términos que se determinen, con apego a los principios que rigen la función estatal que le ha sido encomendada.

En concordancia con lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió en la ejecutoria de la contradicción de tesis 29/90, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 10/94, de rubro: **"COMPETENCIA. SU**



Ante tal situación, la denunciante estima que se vulneran los artículos 134, párrafo séptimo y octavo de la Constitución Federal, 100 párrafos primero, noveno y décimo de la Constitución Local, 113 y 169 párrafo primero de la Ley Electoral y 250 fracción I del Código Penal Federal.

En ese contexto resulta conveniente revisar el contenido de los citados preceptos de la constitución federal y local, así como otras normas relacionadas con lo denunciado, para determinar si es materia del presente procedimiento sancionador y por consecuencia competencia del Consejo General; para lo cual se vierten las siguientes disposiciones:

De la Constitución Federal

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Párrafo 7mo.

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, **sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.**

Párrafo 8vo.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. **En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.**

**De la Constitución Local
ARTÍCULO 100.-**

Párrafo 1ro.

Los recursos económicos de que dispongan los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Organismos Públicos Autónomos y los Municipios, así como sus respectivas administraciones públicas descentralizadas, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, de acuerdo a las metas que estén destinados dentro de sus respectivos Presupuestos de Egresos. Los servidores públicos tienen en todo tiempo la

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Párrafo 9no.

El manejo de los recursos económicos del Estado se sujetará a las bases de este Artículo.

Párrafo 10mo.

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Octavo de la Constitución Política del Estado.

De la Ley Electoral

Artículo 113.- Las precampañas electorales iniciarán:

- I. Cuando se celebren elecciones para elegir Gobernador del Estado, diputados y municipales, el día veintidós de enero del año de la elección, y
- II. Cuando se celebren elecciones para elegir sólo diputados al Congreso del Estado y municipales a los ayuntamientos, el día dos de marzo del año de la elección. Todas las precampañas deberán concluir, a más tardar, un día antes del inicio del periodo de la solicitud de registro de candidatos.

Artículo 169.-

Párrafo 1ro.

Las campañas electorales de los partidos políticos, coaliciones y candidatos registrados iniciarán al día siguiente del otorgamiento del registro de candidaturas para la elección respectiva por el Consejo Electoral correspondiente, y concluirán tres días antes del día de la elección, durante los cuales no se permitirá la celebración de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales.

Del Código Penal Federal

Artículo 250.- Se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días a quien:

- I.- Al que, sin ser funcionario público, se atribuya ese carácter y ejerza alguna de las funciones de tal;

b) **Temporalidad para plantear los procedimientos sancionadores de conformidad con los artículos 364 y 372 de la Ley Electoral.** De Ley Electoral se desprende que los Procedimientos Ordinarios Sancionadores en materia



electoral, podrán tramitarse dentro y fuera de los procesos electorales locales para sancionar las infracciones a la Ley Electoral, mientras que el Procedimiento Especial Sancionador procede dentro del Proceso Electoral cuando se denuncian conductas específicas que incidan en el mismo proceso, preceptos que a continuación se reproducen:

Artículo 364.- El Procedimiento Sancionador Ordinario tiene por objeto sancionar las infracciones cometidas a las disposiciones electorales, dentro y fuera del proceso electoral local.

Artículo 372.- Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso, instruirá el procedimiento especial establecido en la presente sección, cuando se denuncie la comisión de conductas, no relacionadas con radio y televisión, que:

- I. Violan lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 5 de la Constitución del Estado, así como aquellas que violen el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que incidan en el proceso electoral local respectivo;
- II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, o
- III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

De todo lo anterior, es de concluirse, que los hechos denunciados para poder ser conocidos y resolver sobre su legalidad o no por esta autoridad, tendrían que encontrarse dentro del contexto de un proceso electoral e incidir en la equidad de la competencia de los actores políticos de cara a los comicios electorales, y por lo que hace al diverso relativo a la materia penal, obviamente tiene por objetivo velar por el respeto de las disposiciones que pertenecer al marco normativo del derecho penal.

En sustento a lo anterior esta lo previsto en la jurisprudencia 3/2011, de rubro: **"COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES ELECTORALES ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)"**, en la que la Sala Superior sostuvo que las autoridades electorales administrativas locales son competentes para conocer de las quejas y denuncias que se presenten en contra de servidores públicos por aplicar recursos públicos para influir en la equidad de la competencia entre los

partidos políticos en el ámbito local, o por realizar propaganda gubernamental que implique su promoción personalizada y afecte la contienda electoral en la entidad federativa de que se trate. Más aún que, lo estipulado en el artículo 134 de la Constitución federal no tiene incidencia exclusiva en la materia electoral, sino que, tiene validez en distintas materias tales como electoral, administrativa o penal.

De lo cual, resulta que cuando se denuncia el uso indebido de recursos públicos por parte de servidores públicos y/o propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada se podría abordar desde aspectos diversos, como lo son:

- **Electoral**, por violación directa a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución federal por su incidencia en un proceso electoral.
- **Administrativa**, por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas.
- **Penal**, por violaciones al Código Penal en relación al ejercicio indebido de recursos públicos o en virtud de una infracción punible en los términos del artículo 45 de la Ley General de Comunicación Social.

Por consiguiente, conforme con el principio de coherencia del sistema normativo, es dable sustentar que, la transgresión a lo previsto en el artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución federal puede ser materia administrativa, electoral o penal.

Así las cosas, no todo ilícito derivado del uso indebido de recursos públicos por parte de servidores públicos y/o propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada atañe al ámbito electoral ni, por ende, pertenece a la competencia de las autoridades de esa materia perseguirlos y sancionarlos. De forma que, se reitera, para que la trasgresión a lo previsto en el artículo 134 de la Constitución Federal sea de la competencia de los órganos electorales **debe afectar la equidad de la competencia electoral.**

Razonar en sentido contrario, implicaría que el Consejo General conociera de un asunto del cual no tuviera competencia, sin que sea válido y razonable



aducir que el sujeto denunciado sea un servidor público, pues ha sido criterio reiterado de la Sala Superior que la competencia en materia electoral no se actualiza con base en dicha circunstancia, sino sustancialmente por la elección que se aduce vulnerada, pues es ahí justamente donde pudo o puede vulnerarse el principio de equidad en la contienda.

Ahora bien, derivado de la jurisprudencia 12/2015 declarada obligatoria por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA; sabemos que a efecto de considerar si la propaganda a la que se alude en el párrafo octavo del artículo 134 es susceptible de vulnerar el mandato constitucional y en consecuencia la norma secundaria electoral local, que daría competencia a esta autoridad electoral para conocer y resolver debe atenderse a los elementos siguientes:

- a) **Personal.** Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público;
- b) **Objetivo.** Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y
- c) **Temporal.** Pues resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de campañas.

Lo anterior se robustece con las Jurisprudencias 4/2018 y 8/2016, mismas que a continuación se reproducen:

"JURISPRUDENCIA 4/2018, ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).



Una interpretación teleológica y funcional de los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado de México, permite concluir que el elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en principio, solo a partir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, se publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar: 1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y 2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. Lo anterior permite, de manera más objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de un mensaje, así como generar mayor certeza y predictibilidad respecto a qué tipo de actos configuran una irregularidad en materia de actos anticipados de precampaña y campaña, acotando, a su vez, la discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y maximizando el debate público, al evitar, de forma innecesaria, la restricción al discurso político y a la estrategia electoral de los partidos políticos y de quienes aspiran u ostentan una candidatura."

"JURISPRUDENCIA 8/2016, COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR SU VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO.

De los artículos 443 y 445, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que constituyen infracciones de los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, la realización anticipada de actos de precampaña y de campaña, con lo cual se pretende salvaguardar el principio de equidad en la contienda comicial. En este contexto, para determinar la competencia para conocer de la queja sobre actos anticipados de precampaña o campaña, por regla general, se toma en cuenta la vinculación al proceso electoral respectivo, por configurar un elemento orientador para ese fin, porque si lo que se busca, es precisamente tutelar la equidad en la contienda, corresponderá conocer de la misma a la instancia administrativa electoral que organice los comicios que se aduce, han sido lesionados."

En consecuencia y toda vez que los artículos 1, 2, fracción V y 4, de la Ley Electoral establecen:

Artículo 1.-

Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de observancia general en el Estado de Baja California y tienen por objeto dar certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad al ejercicio de la función pública electoral.



Artículo 2.-

La presente Ley reglamenta las normas constitucionales relativas a:

V. Las faltas y sanciones administrativas, así como el Régimen de Responsabilidades y sanciones de los servidores públicos del Instituto Estatal Electoral.

Artículo 4.-

Corresponde la ejecución y aplicación de las normas contenidas en esta Ley, dentro de su respectivo ámbito de competencia, al Instituto Estatal y al Tribunal Electoral, quienes tendrán la obligación de velar su estricta observancia y cumplimiento.

En concordancia con el contenido de los artículos 6, fracción I, a), 7, párrafo 1, fracción II, párrafo 2, fracción I, 43 y 44, párrafo 1, fracción III del Reglamento de Quejas y Denuncias, cuyo contenido se transcribe para mayor claridad:

Artículo 6. Finalidad de los procedimientos

1. Los procedimientos sancionadores tienen como finalidad sustanciar las quejas y denuncias presentadas ante el Instituto, iniciadas a instancia de parte o de oficio, a efecto de que la autoridad competente, mediante la valoración de los medios de prueba que aporten las partes y las que se recaben durante la tramitación del procedimiento, determine:

I. En el caso de los procedimientos ordinarios sancionadores:

a) La existencia o no de infracciones cometidas a las disposiciones electorales, dentro y fuera del proceso electoral o bien, remita el expediente a la instancia competente, y

Artículo 7. Órganos competentes

1. Son órganos competentes para la tramitación y/o resolución de los procedimientos sancionadores:

I. El Consejo General;

II. La Comisión de Quejas y Denuncias;

2. Los órganos del Instituto conocerán:

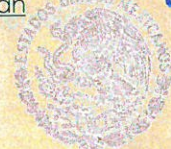
I. Del procedimiento sancionador ordinario, sustanciado, tramitado y resuelto cuando se denuncie la infracción de normas electorales que no sean materia del procedimiento especial, dentro y fuera del proceso electoral local.

TÍTULO CUARTO

**DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES ESPECIALES**

Artículo 43. De la materia y procedencia

El procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas podrá iniciar a instancia de parte o de oficio, cuando cualquier órgano del Instituto tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras que no sean materia del procedimiento especial sancionador.



Artículo 44. Improcedencia y sobreseimiento en el procedimiento sancionador ordinario

I. La queja o denuncia será improcedente cuando:

III. Se denuncien actos de los que la autoridad electoral resulte incompetente para conocer; o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan violaciones a la Ley Electoral;

Es evidente que la resolución de temas como la promoción personalizada, actos de precampaña y actos anticipados de campaña, son competencia del Instituto, si se plantean mediante un procedimiento especial sancionador, mismo que fue diseñado para sustanciarse durante el proceso electoral, para tutelar la competencia política de cara a los comicios electorales, esto se hace patente del contenido del artículo 372, de la Ley Electoral antes revisado y transcrito.

Así las cosas, para entrar al estudio y resolución de cuestiones como las expuestas en la denuncia que ha dado origen a este expediente, se hace necesario esté en curso un proceso electoral local y siendo que no nos encontramos ante dicha circunstancia temporal, habida cuenta que el Proceso Electoral 2018-2109 concluyó en fecha siete de octubre de dos mil diecinueve y el próximo Proceso Electoral iniciará hasta diciembre de dos mil veinte, este Consejo General no es competente para entrar al estudio de lo planteado por la quejosa, por lo que habrá de sobreseerse el procedimiento identificado con el número de expediente IEEB/UTCE/PSO/05/2020.

Lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia previstas en el artículo 367, fracción I, inciso c), de la Ley Electoral y 44, numeral 1, fracción III, del Reglamento de Quejas y Denuncias, por lo que de conformidad con el mismo precepto en su fracción II, inciso a), es procedente sobreseer el presente Procedimiento Sancionador Ordinario.

III. VISTA A DIVERSAS AUTORIDADES Y ENTE POLÍTICO. No obstante que esta Autoridad por lo expuesto en el considerando previo no se encuentra facultada para realizar el análisis y determinación de la vulneración o no a la ley electoral local mediante los hechos denunciados, se estima oportuno que en términos de los artículos 4 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos



Electorales; 8 de la Ley Electoral se de vista a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión LXIV Legislatura, a la Procuraduría General de la República y al partido político MORENA a fin de que en el ámbito de sus competencias; conozcan de la denuncia y procedan conforme a derecho, para tal efecto, remítanse a las autoridades y partido político citado, copias certificadas de la denuncia y anexos, así como de esta resolución.

IV. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la Constitución, se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de inconformidad previsto en el precepto 283 de la Ley Electoral.

V. PUBLICACIÓN EN EL PORTAL INSTITUCIONAL. Se ordene publicar la presente resolución en el portal de internet del Instituto, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, párrafo 4, del Reglamento del Instituto.

VI. NOTIFICACIÓN. Con fundamento en los artículos 303 y 363 de la Ley Electoral, se ordene notificar la presente Resolución a la C. Socorro Irma Andazola Gómez, Diputada Federal Propietaria.

Por lo expuesto y fundado, se emiten los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se sobresee la queja promovida por la C. Socorro Irma Andazola Gómez, Diputada Federal Propietaria.

SEGUNDO. Dese vista a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión LXIV Legislatura, a la Procuraduría General de la República y al partido político MORENA en términos del Considerando III de la presente Resolución.

TERCERO. De conformidad con el Considerando IV, esta Resolución es impugnabile.



CUARTO. Publíquese la presente resolución en términos de lo establecido en el Considerando V de la presente Resolución.

QUINTO. Notifíquese a la C. Socorro Irma Andazola Gómez, Diputada Federal Propietaria, como lo señala el Considerando VI de la presente Resolución.

SEXTO. En su oportunidad archívese el expediente en que se actúa, como asunto total y definitivamente concluido.

DADO en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los once días del mes de junio del año 2020.

ATENTAMENTE

**"Por la Autonomía e Independencia
de Los Organismos Electorales"**

LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ

PRESIDENTE

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA

VOCAL

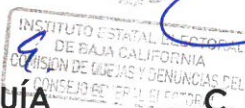
C. DANIEL GARCÍA GARCÍA

VOCAL

C. JUDITH VALENZUELA PÉREZ

SECRETARÍA TÉCNICA

OVMS/JVP/SQG



UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL

PROYECTO DE RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO IDENTIFICADO CON LA CLAVE IEEBC/UTCE/PSO/05/2019, SE CLASIFICAN:

Clave de Dato	Tipo de Dato	Páginas
1	Correo electrónico personal de quien denuncia	4

Artículos 7, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA; 4, FRACCIONES VI, XII, Y XXVI DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA POR TRATARSE DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, AL REFERIR DATOS PERSONALES.

FIRMA DE LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL



FECHA Y NÚMERO DE ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DONDE SE APROBÓ LA VERSIÓN PÚBLICA

“ACUERDO IEEBC/CTyAI/017/2020-1 DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE FECHA 17 DE JULIO DE 2020”